

CAPÍTULO V

LA MASACRE DE UNCÍA DEL 4 DE JUNIO DE 1923

1 BAUTISTA SAAVEDRA

Saavedra, alrededor del cual declararon el más impresionante silencio las sectas entroncadas en el liberalismo, se vio obligado a apoyarse en la masa artesana. Ciertamente es que los dirigentes obreros y los políticos de avanzada salidos de esta última fustigaban, juntamente con los estudiantes, a la dictadura saavedrista. Los trabajadores y bolivianos de avanzada nunca han olvidado ni perdonado a los carniceros engalonados que timonearon la masacre de mineros en Uncía.

En Saavedra -que uno de sus biógrafos lo considera como a uno de los solitarios en el Palacio Quemado- se repite la amarga experiencia que vivió Belzu: la mano generosa tendida al adversario político (ambos presidentes comenzaron por llamar a los desterrados y por ofrecer ministerios a los enemigos) que sólo encuentra odio despectivo y oposición intransigente.

Impulsar la dictación de un cuerpo coherente de leyes sociales (hasta ese momento todo se reducía a tanteos aislados) constituye un mérito para cualquier gobierno, porque denuncia el afán de ponerse al día con las conquistas alcanzadas por la sociedad contemporánea y porque sabe que ya no es posible cerrar los oídos ante el creciente clamor de los oprimidos. Pero sería erróneo considerar que Saavedra obsequió, porque así se le "ocurrió de acuerdo a sus especulaciones teóricas, esas leyes al pueblo. La verdad es que las organizaciones obreras las fueron conquistando y paulatinamente, conforme se demuestra en esta historia. Los liberales -que concluyeron convirtiéndose en los peores enemigos de Saavedra- fueron los pioneros en este terreno.

"En su propósito de establecer fundamentos sociales de efectivo adelanto colectivo, encara los problemas de la legislación obrera. Los regímenes liberales poco se inquietaron por la suerte de las clases trabajadoras" (Aramayo Alzérreca).

No puede haber la menor duda de que esa legislación despertó la resistencia de los capitalistas individualmente considerados, pues tendía, en cierta manera, a disminuir la cantidad de plusvalía que se apoderaban. Puede ser que este fenómeno se hubiese traducido en la impopularidad de Saavedra en los círculos dirigentes de los partidos rosqueros. A pesar de todo esto, hay un hecho cuya importancia no ha sido hasta ahora puntualizada. La legislación social se convirtió en una necesidad inaplazable en la medida en que crecía el desarrollo industrial; era preciso rodear la explotación del proletariado de condiciones normales, que importasen preservar la mano de obra de su destrucción. Después de Saavedra los sindicatos siguieron luchando por la dictación de otras leyes más perfeccionadas. Escribió algunas páginas poniendo de relieve la importancia del proletariado, lo que no era ninguna novedad: "El proletariado está constituido en todas partes, por las fuerzas vivas del país. Sus brazos no sólo son la defensa nacional en el peligro sino las columnas en que descansa la sociedad y la fuente de su progreso y prosperidad económica".

Los obreros cifraron sus esperanzas en los diversos sacudimientos políticos ocurridos en el país, una vez los apuntalaron entusiastamente y casi siempre confiaba en que los gobernantes de turno les diesen bienestar económico y libertad política por lo menos. Los esfuerzos e intentos que buscaban estructurar un partido obrero independiente chocaban con la creencia muy difundida entre los trabajadores de que su bajísimo nivel cultural no les permitía "aspirar al poder". La tesis fue creada y difundida por los ideólogos de la clase dominante.

Los regímenes que se presentaron con ribetes populares fueron fatales para las masas porque pudieron desorientarlas y engrillarlas más fácilmente.

La "revolución" del 12 de julio de 1920 confirma lo dicho. Los socialistas, los que organizaron los partidos

obreros de ese entonces, no ocultaron las esperanzas que despertó en ellos el republicanismo. Lo que se transcribe a continuación corresponde a una carta firmada por Ricardo Perales:

“Los socialistas habíamos visto con simpatía la evolución política del 12 de julio, harta decepción hemos sufrido al presenciar las elecciones con que el partido republicano debutaba en el poder; honda amargura hemos experimentado al ver a los obreros republicanos, aleccionados por sus candidatos, perseguir y hostilizar a los ciudadanos independientes”.

Las sucesivas decepciones en este terreno fortalecieron, en la vanguardia obrera la necesidad de dar nacimiento a un partido revolucionario propio de los trabajadores: “He ahí por que, para preservar a la juventud trabajadora de esta enfermedad social que va envileciendo más el alma colectiva, vamos a nuestra organización política como recurso supremo de educación moral y cívica de los ciudadanos, con nombre propio, con programa y ciudadanos propios también”.

Los líderes obreros buscaban superar la incultura de la clase enviando a las suyos a las universidades.

Saavedra supo utilizar a ciertos grupos de trabajadores contra su adversario Salamanca. “El bloque izquierdista (Salamanca), equilibrando así con el que obedecía a don Bautista, se vio en el trance de abandonar sus asientos cuando en el colmo del barullo que provocaba la barra aleccionada y formada por los carrilanos del ferrocarril La Paz-Yungas, llenaba el recinto parlamentario” (O. Urioste). Los genuinos, a su turno, también levantaron a obreros contra Saavedra.

Bajo el gobierno Saavedra fueron dictadas las leyes sobre accidentes de trabajo, de Ahorro Obligatorio, acerca de la reglamentación de las huelgas y las que crean el Instituto de Reformas Sociales.

Hablar del socialismo de Bautista Saavedra constituye uno de los mayores equívocos. Habiendo comenzado como liberal llegó a la conclusión de que en Bolivia no podían aplicarse satisfactoriamente los principios de la democracia burguesa, pero esta crítica la hizo no desde el punto de vista socialista o marxista, sino permaneciendo en posiciones derechistas. Llegó a conclusiones fascistas y si rebautizó a su partido con el nombre de socialista sólo fue por concesión al espíritu de la época. Esta conclusión se desprende de la lectura de sus múltiples escritos. pues tuvo el cuidado de volcar en letras de molde todos sus pensamientos políticos.

El saavedrismo se apoyó socialmente en la clase media y particularmente en el artesanado y en esta medida siguió la tradición liberal; se puede decir que fue el resultado de la ruptura del partido del general Camacho por la izquierda. El que no hubiese llegado a posiciones radicales se debió a las nuevas circunstancias que imperaban en el país. Dos nuevas fuerzas se disputaban el predominio de la política: la gran minera y las masas obreras que comenzaban a incorporarse. Saavedra, a pesar de todos sus choques con algunas gerencias capitalistas, siguió a la gran minería y en los obreros organizados únicamente vio a conspiradores comunistas.

La revolución “republicana” enarboló muy en alto los principios del liberalismo, es decir, de su tronco principal. No pocos hablaron a posteriori acerca del socialismo del doctor Saavedra, incurriendo así en una de las mayores arbitrariedades.

Reunida la Convención saavedrista comenzó declarando la vigencia de la Constitución Política de 1880 (en realidad aprobada en 1878), sin haberse atrevido a introducir reforma alguna. Este hecho, insólito si se tiene en cuenta que a lo largo de nuestra historia todos los presidentes se esforzaron por darse “su” propia Constitución viene a confirmar la naturaleza conservadora del republicanismo, incluso en su sector más populachero.

El gobierno Saavedra resultó el instrumento de la preeminencia norteamericana tanto en el campo económico como político dentro del país. La metrópoli inglesa actuó principalmente a través de los regímenes liberales El vencedor de 1920 se abandonó en brazos de los banqueros de Wall Street para resolver las dificultades económicas del Estado y para financiar algunas obras que pudiesen marear con el sello del progreso su paso por el poder. Saavedra al proceder así no hizo nada extraordinario, se limitó a iniciar una conducta que será norma invariable en los años posteriores.

La inversión del capital financiero, eje básico de la penetración imperialista, está lejos de concluir como

una operación puramente económica y, más bien, tiende a proyectarse al campo político y es el punto de partida del control de la vida del país dependiente. Muchas veces esta realidad se encubre tras declaraciones líricas acerca de la soberanía nacional y otras lindezas por el estilo. Durante el gobierno Saavedra el imperialismo norteamericano sentó sus reales de una manera por demás brutal, al extremo de que el mismo Presidente se vio obligado a pedir a los yanquis que moderen sus exigencias, no se sabe si cediendo a las duras críticas de la oposición o acaso reaccionando espontáneamente ante la prepotencia y avaricia de los banqueros.

Es consecuencia de la economía capitalista mundial el que los países se vean obligados, para lubricar el funcionamiento de sus relaciones internacionales, a recurrir, con mayor o menor frecuencia, al empréstito foráneo. Sólo los adoradores del pasado colonial pueden exhibir como un mérito o una virtud el que el país no deba a nadie.

"En 1908 -dice Margarita Alexander Marsh-, Bolivia se distinguió por ser un país sin deuda exterior"²¹. Se estableció que en 1950 -año en que se aprobó la ley de reajuste de la deuda externa- se debía a los banqueros del exterior 133.666.100 de dólares americanos (59.422.000.- de capital y 74.244.100.- de intereses devengados), suma que superaba en mucho el monto del presupuesto nacional²². Durante el siglo XX los empréstitos han constituido uno de los canales -solamente uno- de penetración del imperialismo. Las mejores o peores condiciones en las que se ejecutan los préstamos dependen no únicamente de la naturaleza de los diferentes gobiernos sino -y principalmente- de la capacidad de resistencia del país.

El empréstito Nicolaus no fue el primero ni el último en la tortuosa historia financiera de Bolivia, hubieron otros y algunos también vergonzosos, que hablan con trágica elocuencia de la poca capacidad de la clase dominante criolla.

En 1879 se hundió estrepitosa y escandalosamente la "Empresa Church", organizada en Londres para emitir obligaciones por un millón setecientas mil libras esterlinas, a veinticinco años y al seis por ciento, y cuyo objetivo era financiar la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré. El largamente acariciado proyecto buscaba vencer las cachuelas del Mamoré y así facilitar la exportación de los productos tropicales del noroeste boliviano. Bien pronto las autoridades inglesas y el público se dieron cuenta de que las compañías formadas por "G. E. Church, un norteamericano, para construir un ferrocarril de 153,5 millas de longitud y establecer la navegación sobre estos ríos, fueron organizaciones sobre el papel y todo el proyecto una quimera".

La crisis financiera norteamericana de 1907 hizo peligrar la estabilidad monetaria en Bolivia; para superar esta dificultad y "contribuir al establecimiento del patrón oro de la moneda" se obtuvo un préstamo de 500.000 libras esterlinas de J. P. Morgan al seis por ciento que posteriormente, en 1922, fue incorporado a la operación de conversión de la deuda externa.

En Francia se colocaron dos empréstitos. El primero, en 1910, de 1.500.000.- libras al 5 por ciento y sirvió de soporte al naciente Banco de la Nación. En 1913, el Crédit Mobilier prestó al gobierno un millón de libras, también al 5 por ciento, para construir el ferrocarril Atocha-La Quiaca.

Para la construcción del ferrocarril La Paz-Yungas fue flotado, en 1917, el empréstito Chandier, por 2.400.000.-dólares americanos, al 6 por ciento y la amortización anual del 2%. Colocado a un, plazo de veintitrés años, venció en 1941. Sirvieron de garantía, por largos períodos de tiempo, rentas saneadas del Departamento de La Paz: "a) primera hipoteca sobre la línea férrea La Paz-Yungas; b) primer gravamen sobre las rentas generales del Departamento de La Paz y sobre los reintegros de la contribución adicional que grava las hojas de coca; c) primera hipoteca sobre el ferrocarril Arica-La Paz en el sector de Estación Terejra y Corocoro; d) primer gravamen sobre las rentas generales que arrojen las concesiones ferrocarrileras en Bolivia; e) primer gravamen sobre la renta de impuesto de importación de mercaderías al Departamento de La Paz; f) gravamen subsidiario sobre las rentas de la República existentes en aquel momento" (Romero Loza). Esta operación puede considerarse como el antecedente de la sistemática entrega de las diversas rentas del país y de su misma soberanía a los imperialistas.

La crisis política de 1920 impidió que prosperen las negociaciones entabladas con la Imbrie and Company

21.- Margarita Alexander Marsh, "Nuestros banqueros en Bolivia", Madrid, s. f.

22.- José Romero Loza, "Temas económicos de actualidad", La Paz, 1952.

para concertar un empréstito de 10.000.000.- de dólares al 6 por ciento, con el fin de cancelar la deuda francesa.

El nuevo gobierno se vio colocado ante el problema de superar el crónico déficit del presupuesto nacional y de convertir los vales de aduanas (habían sido emitidos dos por el régimen liberal y uno por el republicano), que reconocían el elevado interés del 9 por ciento y que servían en la práctica para cubrir los gravámenes aduaneros. "Saavedra necesitó dinero en seguida, y obtuvo tan onerosamente a fines del año 1921 un empréstito a seis meses de 1.000.000.- de dólares al 6 por ciento con la razón social Stifel Nicolaus of Saint Louis, cuyo convenio incluía, como alternativa de una exorbitante comisión de 90.000.- dólares, una opción sobre el empréstito protegido que estaba estudiando el Gobierno, y una opción preferente por tres años sobre todo empréstito exterior que pudiese hacer el Gobierno durante ese período" (Alexander Marsh). Esta cláusula de la opción preferente puso al gobierno boliviano en manos de la Stifel Nicolaus, que le impuso un contrato por demás leonino, e impidió que prosperase el plan elaborado por el National City Bank "de conversión del dólar por un valor de 25.000.000.- de dólares al 8 por ciento". El régimen imperante se vio impedido de buscar las mejores condiciones, para colocar su empréstito, hecho que sirvió para exacerbar los ataques de la oposición contra Saavedra. Este empréstito sirve, incluso ahora, para ilustrar los extremos a los que puede llegar la sed de explotación de los banqueros yanquis a un Estado sudamericano débil.

El empréstito Nicolaus comprendía la emisión total de 33.000.000.- de dólares al 8 por ciento. Hasta 1922 fue el de mayor volumen y el contraído en las peores condiciones. Se comprometió como garantía casi la mitad de la renta nacional: 114.000 acciones del Banco de la Nación Boliviana, más los dividendos de las mismas; patentes mineras; rendimiento del monopolio de alcohol; 90% de las rentas del monopolio de tabacos; impuestos sobre dividendos de sociedades anónimas no bancarias ni mineras; impuestos sobre utilidades bancarias, sobre la renta de letras hipotecarias y sobre utilidades de empresas mineras; todos los derechos de importación, sus recargos, y también los derechos de exportación.

El contrato establecía que para asegurar la recaudación de los citados impuestos se designaría una Comisión Fiscal Permanente con participación directa de los banqueros. Se obligó la conversión de varios empréstitos que tenían como garantía la hipoteca de varios renglones de ingresos nacionales. La operación resultó muchas veces perjudicial porque las tasas de interés concluyeron elevándose.

El empréstito Dillon Read y Co. de 1927, por la suma de 14.000.000.- de dólares, estuvo destinado a la construcción de los ferrocarriles Cochabamba-Santa Cruz, Potosí-Sucre y Atocha-Villazón. Volvió a comprometerse numerosas rentas.

En 1928 fue flotado el empréstito Dillón Read y Co. por veintitrés millones y fue empleado una parte en la redención de algunos empréstitos y la otra en la construcción de los ferrocarriles Potosí-Sucre y Cochabamba-Quillacollo.

Las dificultades económicas del país determinaron. en 1931, la súbita suspensión de la atención de la deuda externa, lo que trajo su desprestigio entre los banqueros. Fueron realizadas muchas gestiones buscando superar el impase, desde el rescate clandestino de bonos hasta las largas tratativas con el Consejo Protector de Tenedores de Bonos buscando la condonación de intereses y de parte del capital. Finalmente, en 1950 fue aprobada la ley de normalización de la deuda externa, como requisito indispensable para recibir ayuda económica del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington.

2 ANTECEDENTES

No están en lo cierto los que creen que Uncía (así se escribe ahora) recién se conoció durante la República. En la Colonia ya estaba catalogada como zona minera y formaba parte del distrito de Chayanta. En esa época se empleaba la **s** en lugar de la **c**: Unsia. En el número 18 del "Boletín y Catálogo del Archivo Nacional" (Redactor: Ernesto O. Rück, Sucre, 9 de mayo de 1888) se encuentra una referencia, entre los expedientes del siglo XVI existentes en dicho archivo, sobre los trámites hechos por el Justicia Mayor del partido de Chayanta a fin de evitar que Unsia sea incorporada al Corregimiento de Oruro.



Empleados de la Patiño en La Salvadora, en la época de la lucha con La Lallagua

En la Colonia había discusión sobre cómo designar a ciertas localidades famosas. Pocoata, por ejemplo, era llamada Copoata, y a Huanuni se la llamaba Guanuni (jurisdicción de la Villa de Oruro), esto guardando cierta fidelidad a cómo las nombraban los indígenas.

En materia de minería casi todo lo debemos a los incas y a los españoles. Guanuni era ya materia de disputa entre mineros en plena Colonia.

Según una reconstrucción hecha por Manuel Carrasco, el español Juan del Valle llegó, el año 1564, hasta el cerro que los campesinos llamaban Orko Intijaljata (la montaña del sol poniente) y le dio el nombre de Espíritu Santo. Allí trabajó en busca de plata y bien pronto vio frustradas sus esperanzas porque las vetas únicamente contenían estaño. El socavón horadado con tanta fe por el español ha pasado a la historia legendaria de la minería con el nombre de Juan del Valle. En el cerro Espíritu Santo está ubicada "La Salvadora".

Según Rodolfo Soliz G.²³, que se autotitula codificador obrero, la primera masacre obrera se produjo en el mes de julio de 1918 en la Empresa Minera "La Salvadora" de Simón I. Patiño (sección Socavón Patiño o Callapería, que es una profunda y gran hendidura natural del cerro, ubicada a unos trescientos metros más de altitud que Miraflores). "Los obreros cansados de soportar vejámenes y ultrajes de los empleados de esta sección reclamaron porque sus haberes no fueron abonados íntegramente en el pago que se efectuaba la tarde de un sábado; como consecuencia de esta reclamación fueron violentamente reprimidos por el entonces Jefe de Punta, un tal José Soruco, que se presentó armado de un nervio". La respuesta fue la indignación y el espontáneo levantamiento de los mineros, que apedrearon y asaltaron los almacenes y la caja de la empresa. Conocedor de estos inesperados acontecimientos, el Gerente Máximo Nava, a la cabeza de un piquete formado por empleados y por elementos de la "Guardia Blanca" (así dice Soliz), que iban armados de carabinas y pistolas, se constituyó en el escenario mismo de los acontecimientos. Se entabló una feroz lucha entre ambos bandos. "Los obreros utilizaban explosivos y dinamitas, con los que prepararon una especie de bombas en tarros de conserva y en botellas". Se sostiene que hubieron muertos y que el belicoso gerente victimó personalmente a un chivato; pero aquel bajó ostentando una herida en la cabeza ocasionada por una pedrada. Los parciales de la empresa se parapetaron en Miraflores (entonces ingenio y planta eléctrica), que fue asaltada por los obreros. Nava informó de los alcances de la rebelión obrera al apoderado de la Patiño, señor Arturo Loayza, que se ha distinguido como enemigo y verdugo de la clase obrera. La empresa logró que el Presidente de la República José Gutiérrez Guerra ordenara el envío de un regimiento de infantería a Uncía. Mientras tanto, el día domingo continuaba la batalla. Nava y sus parciales se habían apostado en las alturas de Miraflores y los obreros ocupaban el camino que conduce a Uncía. "A la una de la tarde abrieron fuego los obreros y atacaron a los de Nava, de donde resultó muerto el mecánico Ayala". A las cuatro de la tarde se aproximaron los soldados, que fustigaron despiadadamente a los mineros. La persecución contra los dirigentes duró varios meses.

23.- Rodolfo Soliz G., "Masacres obreras de Bolivia". La Paz, 4 de junio de 1944. En la época en que publicó este folleto declara su adhesión al gobierno de Villarroel y sostiene que el golpe del 20 de diciembre de 1943 era nada menos que una "revolución social". Se trata de un obrero intelectualizado que participó activamente en la vida sindical, concluyó, por desgracia, pobre y envuelto en disputas judiciales con sus parientes y hasta con los vecinos de su domicilio en Cochabamba. También cantó loas a Hernando Siles.

El folleto "La justicia desmiente al calumniador Rodolfo Solís G." (Cochabamba, mayo de 1962), nos informa que el activista sindical de antaño hizo lo imposible para salir de la miseria a costa de los bienes de su tía María Gonzáles (las malas lenguas afirman que llegó al extremo de intentar ahorcarla).

El "codificador" se vio convertido en picapleitos, en insigne picapleitos. Sobre esas sus correrías escribió el folleto "Injusticias sociales" y estaba seguro de haber dado a la estampa un "tratado de jurisprudencia". Acabó poniendo en duda la imparcialidad de los magistrados de la Corte Superior de Cochabamba y enjuiciando a fiscales y jefes de policía. El incansable batallador nada pudo contra la furia de todos los poderes del Estado.

Aparece como autor de "La justicia desmiente al calumniador... Zacarias Cossío, pero es indudable que detrás estaba la mano de algún rábula, que no tuvo más remedio que soportar en carne viva el cauterio que tan generosamente esparcía la pluma de Solís. Nuestro héroe demostró más capacidad como libelista que como "codificador social".

En los pasillos de los tribunales no hizo más que ganar enemigos que pusieron mucho empeño en denigrarlo: "que vea la opinión pública el descaró de un delincuente paseando impávido nuestras calles, cuando debía estar perennemente en la cárcel... debe estar gozando en el infierno junto con Luzbel y Satanás las delicias de las maldiciones de todos a quienes hizo males, más numerosos que las arenas del mar... Ya desde luego, castigando su mala lengua, el Supremo Hacedor le torció la boca a un lado: sólo le falta arrastrarse como un vil gusanillo, echando su baba contra su propia conciencia".

Parece que inmediatamente los gerentes de "La Salvadora" y de la "Empresa Estañífera Llallagua", actuando bajo el temor de que la osadía de los trabajadores de Socavón Patiño se repitiese en mayor escala, entraron de acuerdo para aumentar la presión sobre sus dependientes. Un famoso chileno Emilio Díaz, gerente de la Llallagua, acentuó la rigidez de la disciplina, ordenó la disminución de los salarios y del pago a los contratistas (en esa época éstos daban propinas de una libra esterlina oro). Los trabajadores decidieron dejar sus ocupaciones y pedir el arreglo de cuentas. Para materializar su decisión, los obreros de Cancañiri, Azul, Blanca y otras secciones, bajaron en masa hasta la administración de Catavi, donde fueron recibidos a bala por Díaz y sus secuaces. Los disparos lograron dispersar a la muchedumbre y ocasionaron varias muertes (los sobrevivientes nunca han podido precisar su número), "algunos cadáveres desaparecieron convertidos en humo en los hornos de calcinación del Ingenio Catavi". Otro pedido al Gobierno concluyó con el envío de un nuevo piquete de soldados para resguardar los intereses de la Empresa. Esta manera bestial de solución de los problemas sociales volverá a repetirse de manera intermitente. En cada huelga seguida de asesinatos se actualizará la leyenda de los cadáveres incinerados en los hornos de Catavi.

En esa época todavía no se conocía el sistema de flotación para eliminar la piritita del mineral, esa finalidad la cumplían los hornos de calcinación. En cada ingenio se veían enormes chimeneas que arrojaban denso humo sin interrupción durante las veinticuatro horas.

Nava y Díaz fueron unos bravos varones que se pusieron incondicionalmente al servicio de los capitalistas. Nava llenó con su nombre y sus proezas toda la época legendaria de Uncía. No sólo era un verdugo de pelo en pecho, sino que se distinguió por su enorme inclinación hacia el sexo femenino. Se esmeró en difundir generosamente su apellido. Parece que Patiño supo reconocer los servicios prestados por su bravo gerente. Concluyó destrozándose el cráneo con un balazo.

"Patiño encontró el hombre que buscaba para administrar la Salvadora. Ese hombre fue Máximo Nava. Inteligente, culto y valiente, era Nava el hombre adecuado para sustituir en la mina a Patiño... Nava era de elevada estatura; su abundante barba gris y su enérgica apostura parecían infundir temor; pero era bondadoso y tenía sumo tacto para tratar a empleados y trabajadores" (M. Carrasco). Hablando con claridad diremos que Patiño encontró en Nava a un buen matón para poner en vereda a los obreros y a sus adversarios de la Llallagua que comenzaron a hacer de las suyas bajo la dirección de su administrador el chileno Díaz. Leamos lo que dice el patañista Carrasco: "el administrador de Llallagua Emilio Díaz hacía gala de importarle poco las autoridades de Bolivia. Si así era, no contaba, en cambio, con la férrea entereza de Máximo Nava con quien tenía que habérselas y ocurrió que el día en que se encontraron los dos socavones en la fractura ocasionada por los disparos de dinamita de la parte de Llallagua, se presentó Nava desafiando el peligro, revólver en mano..."

Según otros izquierdistas, entre los que debe mencionarse a Angélica Ascui, hubo huelga y masacre en Uncía también en 1919. Como no hemos encontrado testimonio ni documentos que confirmen dicho dato nos inclinamos a creer que se trata de una confusión de fecha simplemente ²⁴.

Existen informaciones sobre movimientos huelguísticos que habrían tenido lugar en los primeros años del presente siglo. Se tratan de relatos personales que desgraciadamente no han podido ser confirmados con otros documentos.

Tomás Martínez, viejo obrero de Pulacayo, ha proporcionado datos sobre el conflicto social que en 1904 estalló en la Compañía Huanchaca, cuyo administrador era por entonces el ciudadano Francés José M. de Moulán. La empresa expresó su deseo de aumentar salarios y no se efectivizó solamente por oposición del Intendente de Policía y otro alto jefe, que consideraban la medida contraproducente porque, según ellos, habría contribuido a masacrar a los trabajadores. Los obreros, anoticiados de estos hechos, "se reunieron e indicaron que si hasta cierta fecha no se producía el aumento, ellos irían a la huelga. El administrador dijo que estaba confiado de que la huelga no se produciría y no quiso saber más. Pero, una tarde temprano sonaron las sirenas y los pitos en el campamento y la gente se dirigió a la administración gritando "hay que sacar a patadas al administrador" y así lo hicieron, mientras la esposa de éste disparaba una pistola y mataba a un obrero". Moulán aclaró que el Jefe de Jornales y el Intendente de Policía eran los que se oponían a los aumentos, revelación que obligó a los trabajadores a "buscar a esas personas gritando "hay que matar a Vildoso y a Ortuño... esos traidores". Los culpables lograron escapar, uno de ellos ocultándose por varios días en un nicho del cementerio. Desde luego los

24.- Angélica Ascui, "Homenaje de los caídos de Uncía", La Paz, junio de 1936.



Socavón Patiño. En el primer carro y a la cabeza Dn. Máximo Nava, gerente de Patiño

trabajadores no conseguimos ningún aumento”.

El mismo Martínez recuerda que hubo, en 1918, otra huelga en Pulacayo. El administrador Santiago Pérez Peña pretendió que diez y siete empleados chilenos fuesen admitidos por la empresa, lo que ocasionó desórdenes. Martínez encabezó las negociaciones y el administrador fue prácticamente apresado en Uyuni por los obreros. Estas medidas de fuerza obligaron a la Huanchaca a desahuciar a los empleados chilenos.

En 1921 estalló otra huelga en Pulacayo. El administrador Antonio Nuñez determinó que los pequeños comerciantes que tenían almacenes en el campamento pagasen un elevado alquiler. Tal disposición buscaba convertir el comercio en un monopolio en favor de la firma Portillo y Cía. Las personas afectadas, la mayor parte mujeres del pueblo, se reunieron en “El Polígono”, “donde consiguieron el apoyo de los trabajadores mineros, que decidieron ir a la huelga si el administrador no firmaba un “pliego de comercio libre”. La gente bajó hacia la administración llevando delante una bandera”. Sólo se pudo lograr la firma del acuerdo por el portavoz de la empresa amenazándole con un cartucho de dinamita.

Durante el año 1924 el ferroviario Ernesto Carranza, cooperado por su hijo, realizó una gran agitación política destinada a lograr que los mineros de Pulacayo se incorporasen al Partido Liberal. La empresa exigió un pliego de peticiones conteniendo la demanda de inscripción a dicha organización política. El pliego fue presentado y la respuesta fue el envío de 150 soldados del regimiento Loa a dicho centro minero. Para cortar la agitación fueron apresados y confinados Carranza y otros trabajadores ²⁵.

El obrero que se esconde detrás del pseudónimo Andrescho Kespe y seguramente siguiendo a Solís, dice que en junio de 1918 los trabajadores de la región de Uncía y por primera vez, presentaron a la empresa reclamaciones salariales y de mejor trato por parte de sus superiores. “La empresa desoyó las demandas y disolvió a la multitud manifestante, mediante un regimiento de infantería acantonado en ese distrito, produciendo algunos muertos y muchos heridos, persiguiendo con saña a los que se creía cabecillas, apresando a muchos de ellos y remitiéndolos a la policía de Oruro”. El mismo autor nos hace saber que en el mes de septiembre de 1919 los obreros de dicho distrito se reunieron para protestar por la disminución de remuneraciones a los contratistas y por malos tratos por parte de los gerentes Díaz, Nava y sus secuaces. En Catavi recibieron a los obreros “a bala, causando varios muertos y heridos, cuyos cadáveres fueron incinerados en los hornos de calcinación. La guarnición fue reforzada y la persecución fue mucho más feroz”.

Ningún acontecimiento ha tenido tanta influencia en la estructuración del movimiento sindical y revolucionario de Bolivia como la masacre de 1923. Antes de esta fecha han habido huelgas y enfrentamientos de las masas con las fuerzas gubernamentales, pero ninguno ha tenido como objetivo la lucha por el derecho de sindicalización. Un otro rasgo importante: el asesinato colectivo fue consumado por el gobierno que ostentaba orgulloso sus ribetes populacheros. La oposición rosquera al saavedrismo utilizó la masacre de Uncía como bandera de su lucha contra el republicanism. Tampoco se puede pasar por alto que en 1923 el ejército demuestra, de modo indiscutible, su decisión de servir incondicionalmente los negros designios de las grandes empresas mineras. La masacre -argumento brutal de los poderosos- pone de relieve la existencia de un militarismo cavernario y fascistizante, enemigo jurado de los obreros y de toda corriente progresista y renovadora.

Los socialistas y las organizaciones proletarias convirtieron el 4 de junio en el día de lucha del trabajador boliviano, acaso más importante que el propio Primero de Mayo. Año tras año, la izquierda levantaba en el recuerdo de la masacre para subrayar su repudio al gobierno y al sistema capitalista. Únicamente las masacres de Catavi y Siglo XX opacaron en algo los luctuosos acontecimientos de Uncía de 1923.

Las circunstancias anotadas han contribuido a poner en claro hasta los entretelones de la masacre y a producir una abundantísima producción literaria al respecto. Sin embargo, ningún documento es tan importante como el informe producido por el Centro Obrero de Estudios Sociales con el título de “Fundación de la Federación Obrera Central de Uncía” ²⁶ y en cuya redacción participó Guillermo Gamarra, uno de los protagonistas de la huelga general y de la masacre.

25.- “31 de octubre”, La Paz, junio de 1954.

26.- “Fundación de la Federación Obrera Central de Uncía”, sin fecha, 28 páginas mecanografiadas (un ejemplar en los archivos de G. L.)

3 LA FEDERACIÓN OBRERA CENTRAL DE UNCÍA

La "Federación Obrera Central de Uncía" fue fundada el 1º. de mayo de 1923, como una organización de resistencia, por los "trabajadores de la región que estaban cansados de soportar la férula de los capitalistas y muy especialmente de Emilio Díaz, gerente de la Compañía Estañífera Llallagua". Momentos antes se había llevado a cabo un grandioso desfile en homenaje a los mártires de Chicago y "en son de protesta contra el injusto régimen social imperante".

Con anterioridad se realizaron en este distrito minero numerosos ensayos para crear un organismo que defendiese a los explotados e hiciese respetar sus derechos, siempre desconocidos por los capitalistas. Los esfuerzos fracasaron invariablemente debido a la creciente hostilidad de las autoridades que obedecían las sugerencias de las gerencias de las empresas.

La Federación se constituyó como portavoz de los trabajadores de toda la región, tanto de los que prestaban sus servicios en la Empresa "La Salvadora" (Patiño) como en la "Estañífera Llallagua" (compañía chilena) ²⁷. Se determinó que en cada empresa funcionasen sub-consejos federales.

Inmediatamente comenzaron las hostilidades y el sabotaje de las autoridades y de los personeros de las empresas. El gerente Díaz despidió a diez trabajadores por el delito de haber concurrido a la manifestación del Primero de Mayo y se dio modos para poner en pie una sociedad mutualista de beneficencia, que agrupaba a muy pocos obreros y cuya primera decisión consistió en desconocer a la Federación.

La entidad que nació el Primero de Mayo, con la confesa intención de "laborar en pro de la solidaridad, el compañerismo y el mejoramiento económico de los trabajadores mineros" no fue reconocida por ninguna de las poderosas empresas mineras. Así se planteó el punto central alrededor del cual giró todo el conflicto.

Gumercindo Rivera, que se dio modos para poner a salvo gran parte de la documentación de la FOCO ²⁸, cuenta que fue en el seno del Comité Primero de Mayo donde germinó la idea de estructurar una verdadera central obrera del distrito minero más importante, no sólo como dirección de los obreros de las dos grandes empresas que explotaban estaño, sino de todos los trabajadores de las poblaciones de Uncía y Llallagua. "Suspendida la sesión y al comentar lo ocurrido, Rivera propuso la organización de la tan soñada Federación Obrera del Trabajo, organización tan anhelada y perseguida tan insistentemente desde hacía años, que no podía llevarse a cabo por la sistemática oposición de don Máximo Nava... La idea fue acogida con entusiasmo y se resolvió organizar al día siguiente en acto público".

El Primero de Mayo de 1923 en Uncía adquirió contornos apoteósicos, dejó de ser fiesta de regocijo para convertirse en el punto de arranque de la enconada batalla en pro de la organización de los trabajadores. En las primeras horas de la tarde de ese día se concentró en las proximidades de la estación ferroviaria una enorme muchedumbre -cinco mil obreros según Rivera-, que se descolgó amenazante por las callejuelas tortuosas. De la interminable caravana salían atronadores vivas al día del trabajo y a la Federación Obrera. En los bronceados rostros se dibujó la fiereza y el desafío contra la prepotencia patronal, contra los excesos que a diario venía cometiendo el famoso chileno Díaz y flotaba en el ambiente la decisión de forjar la granítica unidad obrera para luego luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo. La multitud desembocó en la "Plaza 6 de Agosto", especie de refugio y vergel recostado en los flancos de las serranías de estaño. Hubieron discursos, algunos fogosos e hirientes y otros conciliadores, se distribuyó ropa a los huérfanos y ocurrieron algunas otras cosas más que los analistas se han olvidado consignar. Con todo, esa vibrante marcha de los explotados ocupa un lugar de importancia en la historia social del país porque fue el marco para la firma del acta de fundación de la Federación Obrera Central, cuyo texto copiamos de Rivera:

"En Uncía, capital de la Provincia Gustillo, del Departamento de Potosí, el día 1º. de Mayo de 1923, a horas 15.30 reunidos en gran comicio popular todos los elementos obreros de Uncía y Llallagua en sus distintas reparticiones gremiales, con objeto de solemnizar la gloriosa "Fiesta del Trabajo" que marca la

27.- "Llallagua, papa o animal monstruoso como dos papas pegadas..." (Ludovico Bertonio, "Vocabulario de la lengua aimara", La Paz, 1956).

28.- Gumercindo Rivera L., "La masacre de Uncía", Oruro, 1967.

fecha inicial en la emancipación social del proletariado y con tal motivo realizaron un desfile de honor que recorrió las principales calles de la población, concentrándose en seguida en la "Plaza 6 de Agosto", donde por acuerdo unánime de todos los concurrentes se resolvió fundar la "Federación Obrera Central Uncía", con fines de patriotismo, lucha y solidaridad obrera, desterrando de su seno rencillas y distanciamientos políticos que sólo tienden a mantener dispersas las fuerzas del elemento trabajador.

"Acto continuo se procedió a la organización de la mesa directiva con el siguiente personal:

"Presidente, Guillermo Gamarra, representando a los obreros de la Empresa "La Salvadora", de don Simón I. Patiño.

"Primer Vice, Gumercindo Rivera L., representando a los obreros del pueblo.

"Segundo Vice, Manuel Herrera, representando a los obreros de la "Compañía Estañífera de Llagua (compañía chilena).

"Tesorero, Julio M. Vargas (del pueblo).

"Secretario General, Ernesto Fernández (del pueblo).

"Secretario de Actas, Marcial Arana (La Salvadora)

"Vocales: Ezequiel Pereira, Melquiades Maldonado, Espectador Mendoza, Julio Soto, Francisco Irusta y Rigoberto Oquendo.

"Vocales suplentes: todos los Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios de las distintas sociedades existentes en la localidad (estas sociedades eran, casi en su integridad, entidades artesanales).

"En seguida se acordó dirigir una nota de protesta ante el Supremo Gobierno de la República contra el ciudadano chileno Emilio Díaz, gerente de la "Compañía Estañífera de Llagua", por los incalificables abusos y atropellos cometidos frecuentemente contra los obreros nacionales..."

Así se inicia la tensa y apasionada batalla que libra la Federación durante un mes por afirmar su derecho a la existencia.

Las fuerzas enemigas ocuparon sus respectivas posiciones inmediatamente que la Federación reclamó ante el gerente Díaz y el Subprefecto de la Provincia Bustillo la restitución a sus trabajos de los diez obreros que habían sido despedidos. El pleito no prosperó porque estos últimos, cediendo a la presión patronal, habían pedido voluntariamente sus finiquitos.

Al nacimiento de la Federación siguió una activísima campaña, que dio como consecuencia el rápido crecimiento del número de afiliados. Los empresarios creyeron que algunas maniobras serían suficientes para contener la creciente influencia de los "federados".

El 4 de mayo "el gerente de "La Salvadora" (Francisco Blik) hizo llevar a su oficina a los compañeros Guillermo Gamarra y Marcial Arana, Presidente y Secretario de Actas de la Federación, respectivamente. Blik les dijo a estos compañeros lo siguiente: "La Federación Obrera Central de Uncía debe ser únicamente local, sin abarcar a otros puntos su radio de acción ni tener relaciones con otras federaciones". Gamarra, que había actuado durante ocho años en el Centro Obrero de Estudios Sociales de La Paz le respondió al gerente: "si la Federación Obrera Central de Uncía fuera únicamente local, si su acción no llegara más allá de Uncía y si las relaciones que trata de mantener con todas las organizaciones obreras de la región boliviana y con las del mundo entero no fueran un hecho, no tendría razón de ser, su existencia no respondería a la alta finalidad que hoy persiguen las federaciones de los distintos países: la revolución social". Marcial Arana expresó: "para que la Federación tenga fuerza y poder tiene que desarrollar su propaganda con toda amplitud y estipular pactos de solidaridad con todos los organismos revolucionarios".

El gerente comprendió que no era posible influenciar sobre los dirigentes de la flamante Federación y menos manejarlos; había que recurrir a otros medios más eficaces que la persuasión y el "soborno.

El papel decisivo que jugaron Guillermo Gamarra, Fernández y otros demuestra que la Federación de Uncía se movía dentro de la orientación marxista. Fernández fue acusado, aunque sin fundamento, de ser agitador comunista peruano. Se ha indicado más arriba que Gamarra era viejo militante del Centro Obrero de Estudios Sociales; la verdad es que trabajaba bajo el control de esta agrupación marxista,

que con todo orgullo podía decir que la Federación de Uncía era su obra. Después de la masacre de 1923 tomó a su cargo la realización de una amplísima propaganda.

Tanto la patronal como las autoridades identificaron a Ernesto Fernández como a activista número uno y el cerebro de la naciente Federación. Esto explica la sañuda vigilancia y persecución a la que fue sometido. "La comisión recibió una comunicación enviada por la Federación de Uncía con un comisionado especial, en la que daba a conocer que la persecución ejercitada contra el Secretario Fernández era algo atroz de parte de las autoridades complacientes a los deseos de Díaz, porque Fernández trabajaba como verdadero hombre y obrero, defendiendo los fueros de la Federación tan vilmente calumniada" (Rivera).

El gobierno tenía plena conciencia de que crecía incesantemente la ola de la rebelión proletaria y que no tenía más camino que utilizar métodos enérgicos para aplacarla. Envío como a su delegado al Fiscal de Distrito de Oruro, Nicanor Fernández, el mismo que arribó a Uncía el 12 de mayo. De una manera sugestiva fue acompañado de un destacamento del regimiento de artillería "Camacho".

Inmediatamente que los miembros del directorio de la Federación se dieron cuenta de la llegada del citado delegado lo entrevistaron, poniéndole al corriente de todos los atropellos inicuos que cometían los capitalistas con los federados".

Aprovechando la estadía del delegado gubernamental, y acaso para ponerlo a prueba, se organizó el sub-Consejo federal de Catavi, que no pudo vivir más que 24 horas, pues todos sus componentes fueron despedidos de sus ocupaciones y conminados a abandonar el campamento en el término de dos días. Las reclamaciones ante el delegado por estos nuevos abusos no tuvieron el menor resultado positivo; éste dio la siguiente respuesta: "no puedo inmiscuirme en los asuntos de la Empresa, ella tiene que resguardar sus intereses".

Las tropas del ejército fueron puestas a disposición del gerente Díaz.

Las empresas mineras fomentaban la aparición de elementos parásitos, que daban un tinte pintoresco a las poblaciones civiles. No solamente concurrían con puntualidad a los clubes, sino que se ocupaban de intrigar y vigilar de soslayo a los políticos opositores y a los mismos agitadores extremistas. Este denigrante panorama de la zoología política hoy continúa igual que ayer.

Los federados señalaron como a soplones a Pacheco, Nava, Iporre. Las autoridades se dedicaron a vigilar los pasos de Moscoso, Vincenti, Goytia y otros opositores al saavedrismo, que se los suponía, relacionados con las organizaciones obreras. Se llegó al extremo de suponer, y esta vez gratuitamente, que los extranjeros Franjola y Sapunar estaban dedicados a trajines conspirativos y empeñados en levantar a los campesinos de Chayanta. Una táctica revolucionaria justa debería haber procedido así, lástima que los federados no hubiesen llegado hasta esa altura en sus concepciones.

En esa época Uncía era unas veces lugar de confinamiento de revoltosos y otras veces el refugio de jóvenes abogados o estudiantes venidos a menos o deseosos de alcanzar rápidamente prosperidad económica.

El gerente Blik hizo todo lo posible por neutralizar la acción de Guillermo Gamarra, no solamente la cabeza visible de la nueva Federación sino su organizador más capacitado. La denuncia de los federados está concebida en los siguientes términos: "Blik propuso al compañero Gamarra que renunciara el cargo de la Federación, prometiéndole en cambio una colocación mejor que la que tenía. Ante esta proposición indigna protestó enérgicamente y dijo que no renunciaría del cargo que sus compañeros de trabajo le habían encomendado y que preferiría ir hasta el sacrificio antes de claudicar vergonzosamente".

No hay razón alguna para dudar de la información proporcionada por el mismo Gamarra. Sus actos como sindicalista demuestran que siempre ha sido un luchador de una pieza e íntegramente dedicado a su clase. Lo hemos conocido en su edad proyecta, absorbido por las actividades industriales, y todavía reaccionando con emoción toda vez que se le conversaba de la lucha heroica del proletariado minero.

A pesar de que desde los primeros momentos fueron concentrados en el distrito fracciones del ejército, es casi seguro que patronos y gobernantes llegaron a la conclusión de que no había más salida que

ahogar en sangre a la Federación sólo después de ensayar otros métodos de ataque.

Las aspiraciones de los trabajadores de Catavi-Uncía podían resumirse en un único punto: garantías para el libre desenvolvimiento de la Federación y respeto a los federados, a fin de que no fuesen despedidos de sus trabajos como consecuencia de sus actividades sindicales. Esta reivindicación fue incorporada más tarde, en 1938, a la Constitución Política del Estado y, en los hechos, continuó siendo desconocida.

Se trataba de un objetivo que interesaba no únicamente a todos los mineros, sino a la clase trabajadora en su conjunto e inclusive a otros sectores de la ciudadanía: el derecho a la libre coalición. Ni duda cabe que los mineros, en esa lejana época, se vieron colocados ante la necesidad de luchar por un planteamiento esencialmente político. La huelga de 1923 constituye un importantísimo jalón en el camino de la conquista del derecho de sindicalización.

Los anteriores antecedentes permiten sostener que los mineros de entonces ya habían alcanzado cierto grado de madurez, sin embargo seguían confiando en la imparcialidad del gobierno y en que éste pudiese otorgarles pacíficamente una serie de concesiones. Estamos frente al fetichismo con el que los oprimidos y explotados rodean, de manera persistente, a la autoridad estatal. Los federados no sospechaban que al organizarse, de manera enérgica y ejemplar, estaban iniciando su lucha contra el gobierno y las empresas. Una amarguísima experiencia llevará al convencimiento de que el Estado en su conjunto estaba incondicionalmente al servicio de los capitalistas. Los federados iniciaron infructuosos planteamientos ante las autoridades, persiguiendo el reconocimiento de sus derechos elementales.

4 TRÁMITE DEL PLIEGO DE PETICIONES

En vista de que los representantes gubernamentales en Uncía no daban garantías para el normal funcionamiento de la Federación, y más bien, apuntalaban la conducta despótica de los empresarios, se acordó enviar una comisión hasta La Paz para que se entrevistase con el jefe del Poder Ejecutivo. Partieron a La Paz, el 19 de mayo, Gumercindo Rivera, Melquiades Maldonado, Marcial Arana y Juan Sotomayor, portando el siguiente pliego petitorio:

“Primero.- Aplicación de la ley de residencia al gerente de la Compañía Estañífera ‘Llallagua’ (Díaz).

“Segundo.- Destitución de los serenos del ingenio Catavi, Gregorio Espinoza, Dámaso Arana y N. Terrazas, por ser estos individuos los instrumentos de que se vale el gerente de la ‘Llallagua’ para hacer cumplir sus órdenes atrabiliarias.

“Tercero.- Restitución en sus puestos a los obreros federados expulsados del ingenio Catavi, que son: Nicolás Borda, Venancio Moya, Fidel Borda, Juan Chávez, Donato Pericón, José García y Víctor Mansilla.

“Cuarto.- Ingreso libre a los campamentos de la Compañía Estañífera ‘Llallagua’ para todos los federados y amplias garantías para éstos.

“Quinto.- Reconocimiento de la Federación Obrera Central de Uncía y sus Sub-consejos federales por parte de las empresas mineras ‘La Salvadora’ y ‘Llallagua’.

“Sexto.- Amplías garantías para los componentes del Sub-consejo Federal de Catavi.

“Séptimo.- Dejar constancia ante el Supremo Gobierno de las garantías y respetos que otorga la Federación Obrera a las dos empresas mineras explotadoras, puesto que su mayor timbre de honor será la rectitud y la justicia, una vez que el ideal que persigue es sólo el mejoramiento de la clase obrera.

“Octavo.- Por último, protestar a nombre de la FOCU por las imputaciones calumniosas e interesadas, atribuyéndole fines políticos perniciosos”.

El equipo dirigente de la FOCU tomó contacto con otras organizaciones obreras del país, preparando así una huelga general que pudiese rechazar la arremetida patronal, pero como un objetivo lejano. Mientras tanto, agotó con superabundancia el recurso de las tratativas, de los razonamientos persuasivos que

buscaban ganar la confianza de las autoridades. En vísperas del trágico 4 de junio, la Federación acuerda enviar una nueva comisión a la ciudad de La Paz, que no tuvo tiempo para cumplir tarea alguna. Esta frustrada misión fue encargada a personas extrañas al movimiento obrero, al párroco de Uncía, Fray Fernando Gonzáles (español), y al Subprefecto de la provincia Charcas, Trinidad Aguilar.

Después de la masacre, Gumercindo Rivera fue confinado a Corque, se radicó posteriormente en Oruro, donde continuó interviniendo en actividades sindicales, habiendo llegado hasta la Presidencia de la Federación Obrera. Cultivó la peluquería como oficio y es autor de un relato sobre la masacre de Uncía.

Melquiades Maldonado, después de un largo y penoso peregrinaje, tuvo que emigrar a la Argentina, donde tomó contacto con activistas de la Internacional Sindical Roja. A su retorno a Uncía, localidad en la que instaló su taller de imprenta (actualmente sigue dedicado a la misma actividad en Oruro), actuó como distribuidor de "El Trabajador Latino Americano".

Mientras la comisión obrera deambulaba por las oficinas de La Paz, arribó a Uncía, el 19 de mayo, un nuevo comisionado gubernamental, esta vez Adolfo Flores, Ministro de Fomento y Comunicaciones. Lo entrevistó un grupo de diez federados, siempre buscando la concesión de garantías para el libre desenvolvimiento de la Federación. El 20 de mayo, a la sazón domingo de quincena, es decir, de descanso para los obreros, se realizó una charla en el local municipal. Se expusieron los abusos de las empresas y se entregó al delegado una copia del pliego remitido a La Paz.

Adolfo Flores, que decía haber militado en el Partido Socialista de la Argentina, actuó astutamente e hizo ofrecimientos demagógicos. En un mitin habido en la plaza "6 de Agosto" dijo que los obreros tenían razón y que era preciso pedir la destitución del gerente Díaz. Los trabajadores, que estaban seguros de contar con el respaldo gubernamental para sus peticiones, respondieron con vítores al Partido Republicano y al Presidente de la República. Como se ve, no había premeditación anti-gubernamental en el grueso de la masa, ésta fue empujada por los mismos acontecimientos a repudiar a las autoridades.

El "socialismo" del ministro de Saavedra tenía como fundamento su militancia en uno de los tantos partidos socialistas bolivianos de la época. Fue expulsado de esta organización, juntamente con Ricardo Soruco, por cooperar a un político considerado enemigo de los trabajadores. La resolución respectiva reza lo que sigue: "Se resuelve separar del seno del Partido Socialista a los ciudadanos Adolfo Flores y Ricardo Soruco por haber infringido el Reglamento Interno aprobado en la Convención de Oruro el 11 de noviembre de 1921".

Un hecho simple (simple y de todos los días en la sociedad dentro de la cual vivimos) contribuyó a avivar los sentimientos internacionalistas de los dirigentes de la Federación. El directorio de la empresa "Llallagua" estaba radicado en Santiago de Chile. Con fecha 21 de mayo se envió el telegrama que se transcribe más abajo a la central de los obreros chilenos:

"A nombre Federación Obrera Central Uncía y confraternidad internacional obreros, ruego usted y miembros digno directorio esa quieran interponer buenos oficios gerencia principal Compañía Estañífera Llallagua pidiendo, como pedimos, sea separado gerencia ciudadano chileno Emilio Díaz, por ser persona ingrata elemento obrero por vejámenes y ultrajes deprimentes. Dejo constancia que obreros ésta proceden sin reparos nacionalidad, inspirados solamente defensa proletarios que no conocen fronteras. G. Gamarra, Presidente Federación".

Los comisionados lograron en La Paz una aparente victoria: el Ministro de Gobierno discutió el pliego de peticiones y accedió a casi todos los puntos, como se desprende de su oficio de respuesta:

"En respuesta a su oficio de ayer relativo al pliego de peticiones presentado por Uds. en nombre de la Federación Obrera Central de Uncía, me es grato hacer constar lo siguiente:

"Estudiados los ocho puntos que contiene dicho pliego durante las dos entrevistas celebradas con Uds. en este Ministerio, hicimos los acuerdos que se mencionan a continuación:

"Sobre el primer punto manifesté que no es llegado el caso de aplicar la ley de residencia al señor Emilio Díaz, pero que el gobierno impondrá sus buenos oficios para mejorar las relaciones de aquel con los obreros.

“El segundo punto no requiere solución.

“En cuanto al tercer punto dije que el gobierno influirá para obtener la separación de los serenos culpables de atropellos cometidos contra los trabajadores.

“El cuarto punto quedó concedido por lo que hace a restituir en sus puestos a los obreros expulsados.

“Se aceptó el quinto punto en cuanto fuere compatible con el libre desenvolvimiento de la Compañía ‘Llallagua’.

“Se consintió en el sexto punto para obtener que las empresas extranjeras de ‘Llallagua’ y ‘Salvadora’ reconozcan la personería de la ‘Federación Obrera Central de Uncía’ y sus ramificaciones con amplias garantías para los federados. Acerca de ellos he sabido después que se llegó, por de pronto, a conseguir que aquellas compañías no se opondrán a la formación de entidades federadas con los elementos propios de cada asiento minero. F. Iraizós, Ministro de Gobierno”.

Las empresas y también el gobierno estaban vivamente interesados en marginar de toda actividad laboral a los agitadores.

Los capitalistas montaban sus propias policías privadas con elementos generalmente hampones y que tenían la misión de precautelar sus intereses materiales y también de mantener a raya a los revoltosos. Este estado de cosas imperó hasta 1952, después de la nacionalización las secciones de “bienestar” perdieron toda su eficacia. En la época de la restauración oligárquica nuevamente se confía en los “serenos” para mantener la disciplina en los centros de trabajo.

El 29 de mayo la Federación ofició a las dos empresas pidiendo el cumplimiento del pliego de conclusiones que había firmado con el Ministro de Gobierno. Las gerencias se limitaron a ignorar el acuerdo. “Se resistieron a cumplir el pliego petitorio estipulado formalmente en el Ministerio de Gobierno. Ni uno solo de los puntos del pliego quisieron poner en práctica. De manera que el triunfo de la Federación en el Ministerio no valía ni un comino”.

No solamente que no se cumplió ni uno solo de los puntos del pliego de conclusiones, sino que las hostilidades de la patronal se acentuaban cada día más. El 31 de mayo fue sorpresivamente apresado por el Intendente de Policías el obrero Ernesto Fernández, secretario general de la Federación y conducido a la estación del ferrocarril, seguramente con la intención de confinarlo. Por suerte pudo ser libertado por algunos obreros que estaban en las proximidades.

Sólo después de que las gerencias desconocieron los acuerdos contraídos por el Gobierno, los dirigentes de la Federación pasan a preparar la huelga, considerando que era el único recurso capaz de hacer entrar en razón a los patronos. La huelga se presentaba como el camino salvador y más si ésta iba a ser de carácter nacional. “La Federación dirigió telegramas a las distintas federaciones de la región boliviana, solicitando su concurso para poner límite a la tiranía dominante en ese asiento minero. Las organizaciones de Oruro, Cochabamba, Sucre, Uyuni y otras respondieron al llamamiento de solidaridad de sus hermanos de Uncía...”

“Los compañeros Fernández y Maldonado salieron de Uncía el primero de junio, en comisión, para estipular pactos de solidaridad con las principales federaciones a fin de que el movimiento huelguístico que tenía que estallar por la intransigencia y la testarudez de unos pocos capitalistas mineros sea general y simultáneo en toda la República...”

5 LA MASACRE

La respuesta gubernamental a los preparativos de huelga en todo el país no se dejó esperar. El primero de junio fue decretado el estado de sitio. Mientras tanto cuatro unidades del ejército se habían ido concentrando en Uncía: los regimientos “Sucre”, “Ballivián”, “Camacho” y el “Batallón Técnico”. El día 2 de junio patrullas de soldados armados recorrían las calles de Uncía; era el preludio de las jornadas

trágicas que se aproximaban.

En los considerandos del Decreto de estado de sitio se sostenía que en determinados centros de la República se presentaron "síntomas evidentes de una honda conmoción política que viene envolviendo a elementos obreros en un movimiento general de alteración del orden público". Además se hablaba de "la manifiesta intervención de agitadores anarquistas y políticos revolucionarios".

Lo que se viene sosteniendo encuentra su confirmación en el mensaje leído por Saavedra ante el Congreso el 6 de agosto de 1923:

"Simultáneamente los trabajos de subversión se preparaba un paro general de obreros en toda la república, especialmente de mineros y ferroviarios, con el fin de producir un transtorno general... Tal medida dio ocasión a que las fuerzas del ejército apostadas en Uncía fueran atacadas con dinamita y armas de fuego. En vano los jefes de cuerpo trataron de disuadir a los obreros a abstenerse de procedimientos violentos, satisfechas como quedaban sus demandas. El ataque arreció no quedando más remedio que apelar a las armas en uso de legítima defensa. De tal actitud resultaron cuatro muertos y cuatro heridos". La justificación del asesinato y la falsificación deliberada de los hechos encajan dentro de la tradición de los gobiernos rosqueros.

La palabra del Presidente popular y querido por los artesanos se aparta deliberadamente de la verdad. Que los obreros se daban modos para expresar su repudio a las tropas armadas es cosa que nadie puede dudar, pero no es exacto que la provocación hubiese partido de aquellos. Las autoridades y la alta jerarquía militar incitaron premeditadamente a las masas para que se vean obligadas a protestar y así justificar el asesinato colectivo.

Carrasco se hace eco, para servir mejor los intereses de los que le mandan escribir, de toda la propaganda oficialista y patronal sobre la supuesta agresión de los obreros a los soldados armados hasta los dientes. "El comandante militar mantuvo una actitud conciliadora, pero los mineros desoyeron las amonestaciones y atacaron a las tropas. Estas se defendieron (¡pobres angelitos!) y se produjo lo inevitable: cuatro muertos y varios heridos". Para el que ha escrito la biografía de Patiño resulta insignificante ese escaso número de muertos y le parece absurda la agitación que siguió a la masacre: "El interés político convierte fácilmente cuatro muertos en cuatrocientos, lo que despierta la emoción popular y el repudio extranjero". La conclusión es lógica: los cuatro muertos eran poca cosa si se trata de castigar a los agitadores extremistas: "No tenía el regimiento más alternativa que rechazar el ataque de los trabajadores... Esa fue la llamada "Masacre de Uncía" que el Presidente Saavedra atribuyó en su mensaje al Congreso Nacional a "unos cuantos agitadores que sin tener comprensión cabal de los problemas que afectan al proletariado, infiltran en las masas de trabajadores ideas falsas, fragmentarias y alucinantes".

El 4 de junio, a horas 11, el Tcnl. Villegas, el My. Ayoroa y Blik visitaron a Gamarra en el lugar mismo de su trabajo, la maestranza de socavón Patiño, para invitarle a entrar en charlas en el local de la Subprefectura y buscar una forma de arreglo al conflicto con la empresa. Los obreros, que instintivamente comprendieron que su dirigente corría peligro, se opusieron a la realización de la entrevista. Los federados se tornaron quisquillosos debido a la presencia de fuerzas armadas en el distrito.

La clase cuando se pone tensa en los momentos de agudización de un conflicto saca a flote toda su capacidad creadora y de orientación que hasta entonces permanece en su subconsciente. Los individuos aislados pueden perder la brújula y caer en las celadas más torpes, la clase, actuando colectivamente, se orienta mejor guiándose por su instinto.

Leamos lo que dice el informe redactado por Gamarra:

"El momento en que el Presidente de la Federación se encontraba cerca al local de la Subprefectura, un regular número de compañeros obstaculizó el paso hacia adelante, manifestándole que engañosamente le invitaron a conferenciar. Fue menester que el digno compañero Gamarra les explicara que trataba únicamente de solucionar el conflicto entre la Federación y las empresas, a fin de que le dejaran penetrar a la Subprefectura. Ya dentro del tantas veces citado local, el compañero Gamarra se encontró con el valiente camarada Gumercindo Rivera L., Vicepresidente de la Federación, con el Dr. Melitón Goitia, Presidente del Partido Republicano Saavedrista, con el doctor Silverio Saravia, Juez de Partido, y con el doctor Gregorio Vincenti. El Tcnl. Villegas, subprefecto accidental, les dijo a estas cinco

personas: tengo el sentimiento de notificarles que quedan presos por orden del Gobierno”.

Los obreros consideraron que el apresamiento de los “doctores” no era más que una triquiñuela para hacer consentir a la opinión pública de que la huelga estaba inspirada por estos políticos. Otros documentos, que más tarde fueron registrados en la misma prensa de izquierda, demuestran que las autoridades estaban convencidas que esos elementos mantenían peligrosas vinculaciones con los federados.

Mientras tanto los trabajadores habían ido concentrándose en la plaza “Alonso de Ibañez” (sitio donde está ubicado el local subprefectural) y seguros de que sus dirigentes habían sido apresados, lanzaban gritos pidiendo su libertad.

La “Plaza Alonso de Ibañez”, a pesar de no ser más que un pequeño claro formado por la desembocadura de varias calles irregulares, es una de las más importantes de la capital de la Provincia Bustillo. Testigo mudo de muchas hazañas de la clase obrera y de horrendos crímenes cometidos por la rosca y el militarismo. Rodean a esa plazuela las oficinas más importantes: juzgados, correos, policía y en sus veredas se apiñan abogados, picapleitos, litigantes, desocupados y malentretenidos.

En 1923 Uncía había alcanzado mucha importancia por el crecido número de habitantes y por el gran volumen de su comercio. La “Plaza Alonso de Ibañez” era también sitio de estacionamiento de automóviles de alquiler.

En esa plaza había, en el centro mismo, un reloj de sol, que la mano irreverente de algún alcalde de pocas luces ha destruido y colocado en su lugar algunos arbolitos.

Gamarra y Rivera, interesados de que los trabajadores no fuesen asesinados por el ejército, salieron a la puerta de la subprefectura para exhortar a los manifestantes en los siguientes términos:

“Compañeros: en este momento hemos sido notificados para ir a la ciudad de La Paz y presentarnos ante los señores gobernantes. Nosotros estamos resueltos a marchar. Ustedes nada deben temer por nosotros, porque todos los actos que hemos realizado, los actos de la Federación han sido hechos a plena luz. Pueden retirarse y esperar los resultados que tendremos con los gobernantes” (Gamarra).

“Compañeros: les quedamos reconocidos por la actitud que han asumido, demostrando así la solidaridad que existe en nuestras filas. Si nada habéis conseguido al reclamar reiteradas veces por nuestra libertad, retiraos a vuestras casas. Abandonad en el presente momento toda gestión por nuestra libertad, porque nada conseguiréis de la insensibilidad de los dueños de la situación, quienes sin motivo y nada más que por satisfacer los caprichos de los déspotas Díaz y Blik y sus secuaces Iporre y Noya, nos han reducido a prisión como si fuéramos criminales. ¿Tratarán de atemorizarnos de esta manera? Error profundo. Los hombres de convicción y de ideales altos jamás se rinden. Iremos a La Paz, nos presentaremos ante los gobernantes, según nos ha dicho el subprefecto interino; pero iremos con la cabeza alta y la conciencia tranquila, y allí nos reivindicaremos. Vosotros estáis convencidos de que la Federación, la cruel pesadilla de nuestros verdugos, que les ha hecho temblar de pies a cabeza a su sola iniciación, jamás ha pensado en la política como nos han calumniado los explotadores Blik y Díaz. El gobierno tendrá que convencerse de la verdad de los hechos y se arrepentirá de haber dado crédito a las autoridades que cotizan sus conciencias. Dentro de pocos días nos tendréis de vuelta a vuestro lado para seguir laborando con más razón por la libertad de nuestra clase y contra el despotismo de los capitalistas; y si sucede algo con nosotros, eso no será nada; para eso están ustedes, miles y miles de explotados que nos reemplazarán en nuestros puestos de honor y sacrificio.

“Por última vez les suplico que se retiren a sus casas, porque todo reclamo será inútil ante la fuerza de las bayonetas” (Rivera).

La alocución de Rivera se distingue por su enorme sinceridad y valentía, pero no alcanza a disipar el malentendido en que habían caído los dirigentes: creer que el Ejecutivo podía hacerles justicia y castigar a los capitalistas.

La masa obrera sencillamente no se movió y siguió reclamando la libertad de sus dirigentes. Frente a tal actitud, el mayor Ayoroa conminó a los trabajadores a disolverse. Ante la tenaz negativa ordenó a los soldados del “Batallón Técnico” hiciesen fuego. El documento de los obreros proporciona los siguientes

por menores:

“Los soldados se negaron a salir a la calle. Entonces el My. Ayoroa se encolerizó y haciendo uso de medios violentos obligó a los soldados a salir a la calle. Ordenó nuevamente que dispararan sus armas contra la masa de obreros y obreras; los soldados acataron la orden, pero dispararon haciendo puntería a una altura considerable, razón por la cual no fueron victimados los indefensos trabajadores. Encolerizado aún más el jefe del “Batallón Técnico”, al ver que sus órdenes no se cumplían al pie de la letra, increpó a los soldados con palabras obscenas y cogiendo una ametralladora mató a cuatro trabajadores e hirió a doce, de éstos murieron tres en los siguientes días, así comenzó esta brutal masacre”.

Tales acontecimientos luctuosos se desarrollaron aproximadamente a las seis de la tarde y todos los observadores coincidieron en atribuir el asesinato al mayor Ayoroa.

Al día siguiente de la masacre, el 5 de junio, ingresaron a la huelga cerca de 6.000 obreros de Uncía-Catavi, movimiento que duró inclusive hasta el día 9, en esta última fecha un nuevo delegado del gobierno, Hernando Siles, impuso a los federados un pliego de conclusiones que les era totalmente desfavorable. En las conversaciones intervino también el sacerdote franciscano Fernando Gonzáles, quien aconsejó a los huelguistas aceptar los puntos de vista propuestos por la empresa, como aquel de dividir la Federación en dos secciones independientes y que no tuviesen vinculación alguna entre ellas. Por este camino fue totalmente destruida la joven Federación Obrera Central de Uncía.

Inmediatamente después de la masacre comenzó la vía crucis de los dirigentes, algo que siempre ha sido así y que seguramente seguirá repitiéndose en el futuro.

Gamarra y Rivera fueron embarcados con rumbo a Oruro el día 5, a horas diez. Faltando algunos kilómetros para llegar a aquella ciudad fueron desembarcados y trasladados a Toledo. Al día siguiente 6 de junio, se los confinó a Corque, donde permanecieron hasta el 28 de noviembre de 1923.

Igual suerte corrieron Primitivo Albarracín y Néstor Camacho, miembros del directorio de la Federación, que el día 5 de junio habían salido con rumbo a Oruro y con la finalidad de reclamar por la libertad de los máximos dirigentes mineros.

Ernesto Fernández fue apresado en Oruro, según los federados por el agente de policía José Vera Portocarrero (que tuvo participación en el movimiento sindical) y luego desterrado al Perú.

Félix Rodrigo nos ofrece la siguiente información sobre Ernesto Fernández: “Sin embargo, valiéndose de un ardid la policía logra detener nuevamente a Fernández y confinarlo a Puerto Acosta, con el pretexto de que se lo enviaba a la sede del gobierno. Se ignora hasta la fecha la suerte que haya corrido este compañero”²⁹.

Ya hemos indicado que Maldonado, que salió en comisión, tuvo que emigrar a la Argentina.

Los obreros, que todavía continuaban en huelga el 8 de junio, solicitaron al Presidente de la República que devuelva la tranquilidad al centro obrero y ordene la libertad de los presos y el retorno de los que fueron confinados. Saavedra remitió la siguiente respuesta:

“Respondo al telegrama que me hacen, expresándome sus sentimientos de tranquilidad y concordia y pidiéndome la vuelta de los obreros que han sido tomados y extraídos de esa. Debo decirles que es necesario que Uds. estén siempre animados de un espíritu de trabajo y tranquilidad en cuyo caso encontrarán siempre apoyo del gobierno para resguardar los legítimos derechos de Uds... Es necesario que vuelvan al trabajo y como consecuencia de ese acto el gobierno atenderá el regreso de algunos compañeros, los menos peligrosos...”

Sobre la actitud inmediata asumida por las otras organizaciones laborales dice el documento de los federados lo que va a leerse a continuación:

“Con el decreto de estado de sitio, las organizaciones obreras de Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz y otras ciudades se vieron obligadas a no asumir ninguna actitud de rebelión en defensa de sus hermanos

29.- Félix Rodrigo, “4 de junio de 1923”, “La Nación”, 4 de junio de 1953.

masacrados inhumanamente en Uncía.

“La Federación Obrera del Trabajo de La Paz, que estaba en antecedentes sobre las reclamaciones que hacía la Federación Obrera Central de Uncía, en cuanto supo que algo grave ocurría se apresuró en enviar a un delegado para que investigara lo que pasaba en las minas.

“El compañero Luis Navarro, socio del “Centro Obrero Libertario”, que fue el delegado enviado por la Federación se quedó en Oruro y no pudo llegar al lugar de la masacre, porque los trenes que esos días corrían de Oruro a Machacamarca y de esta población a Uncía estaban únicamente al servicio del ejército, de los empleados del gobierno y de las empresas mineras. Y lo más que pudo hacer en Oruro fue intervenir en las reclamaciones inútiles que hizo la Federación de dicha ciudad ante las autoridades.

“La Federación Obrera del Trabajo, que estaba desorganizada, por la inactividad de la mayor parte de las organizaciones adheridas a ella, se vio impotente para asumir una actitud enérgica frente al fusilamiento en masa de los mineros de Uncía.

“En la función dramática que dio la Federación Obrera del Trabajo de La Paz, colaborarla por el Cuadro Dramático “Rosa Luxemburgo”, en el teatro Princesa, el 28 de junio de 1923, con objeto de arbitrar, fondos para las familias de los masacrados, el secretario general de esta Federación, compañero Julio M. Ordoñez, dio a conocer al público el origen de la masacre y protestó enérgicamente por semejante crimen.

“Las demás organizaciones obreras de la región boliviana, por carecer de datos concretos respecto a la masacre y por falta de libertad de reunión, permanecieron en silencio ante los crímenes del 4 de junio de 1923”.

También Trifonio Delgado, que dice haber consultado las publicaciones periodísticas de la época y recogido las confesiones de los testigos oculares de la masacre, ha escrito algo que pretende echar luz sobre estos episodios:

“La tropa disparó sus armas contra la masa proletaria indefensa... una lluvia de plomo y fuego había talado la fila delantera del pueblo, el primero en caer fue Leiza, el pánico se apoderó de todos. Al cabo de unos instantes la Plazuela Alonso de Ibañez ofrecía un aspecto desolador, mucho más horrible que un campo donde se hubiese librado una gran batalla, de pronto entre el tendal de muertos y heridos apareció una mujer dando alaridos y que, echando un furibundo anatema, pugnaba por llevarse a su marido muerto. Fue acallada por la potente voz de los mausers y cayó herida. Era Aurelia de Tapia Leiza...”

Nuevamente la sospecha de que algunos cadáveres desaparecieron en medio de las lenguas de fuego de los hornos de Catavi:

“Deprimida la masa proletaria con el horroroso espectáculo apocalíptico, la ciudad dormida, las bocacalles y plazas con guardias, impedido el tránsito, prohibido el acceso a la plaza bajo pena de muerte, donde yacían varios muertos implorando una tumba para sus huesos, comenzó la fatídica tarea de hacer perder el último vestigio de la masacre, las carretas rodaban sordamente sobre el empedrado, llevando su trágica carga al cementerio, las huellas de sangre fueron minuciosamente lavadas del empedrado, ya en la madrugada fueron inhumados algunos cadáveres, los demás desaparecieron, pero tal vez los hornos de calcinación nos hablen con más elocuencia y nos digan también de la cholita con botas blancas que desapareció misteriosamente”.

Al finalizar, Delgado ofrece el siguiente “balance trágico”:

“Muertos: Manuel Tapia Leira, Reimundo Montero, Félix Palomino, Timoteo Veizaga y Víctor Mendoza. Y muchos otros que desaparecieron misteriosamente.

“Heridos sobrevivientes: Zacarías Mamani, Aurelia de Tapia Leiza, Tiburcio Quispe.

“Flagelado: Donato Pericón”³⁰.

30.- Trifonio Delgado, “Uncía antes y después de la hecatombe del cuatro de junio de 1923”, en “Avance”, Oruro, 4 de junio de 1936.

Rodrigo equivocadamente da por muerta a Aurelia de Tapia L. e incurre en error al consignar algunos nombres.

“Bandera Roja” de La Paz ³¹ registró la misma lista con la única variante de Daniel Palomino en lugar de Pablo. Entre los heridos no incluye a Tiburcio Quispe y añade los siguientes nombres: Luis Roso, Ciriaco Avellano, Evaristo Valle, Martín Copa, Florentino Jiménez. Más adelante añade: “El resto de los muertos, que pasaron de cinco, fueron recogidos en varias carretas de la Empresa Minera de Uncía y probablemente cremados en los potentes hornos de calcinación de dicha empresa.

Los dirigentes confinados fueron puestos en libertad el 28 de noviembre, con la condición de que no retornen a Uncía.

Después de los acontecimientos de 1923, los mineros persistieron, con una tenacidad que no puede menos que despertar sincera admiración, en su afán de poner en pie un organismo defensor de los intereses proletarios. Se puede decir que siempre existió una Federación, aunque ésta se redujese a un pequeño círculo que llevaba una existencia semi-clandestina. Resultó disolviéndose oficialmente en 1926. El que firmó tal medida fue su Presidente Miguel Viscarra. La FOT de Oruro lo acusó inmediatamente de traición y de entendimiento con la patronal.

En 1927 se organizó la Liga Obrera del Trabajo y que fue rápida y enérgicamente perseguida, según la información que proporciona Rodolfo Soliz: La “Liga Obrera del Trabajo” fue fundada por el que suscribe en Catavi a principios del año 1927; cuya directiva compuesta de treinta miembros fue apresada y extrañada el 30 de junio de aquel año, y que para el efecto se constituyó otra vez en Catavi el Regimiento Abaroa, y desde aquel entonces nos encontramos los unos radicados en esta ciudad y en Oruro y Cochabamba...”

La primera institución que denunció por escrito el crimen de Uncía fue la agrupación anarquista “La Antorcha” de La Paz. Los que se atrevieron a lanzar el manifiesto acusatorio, entre ellos la admirable Domitila Pareja, fueron sañudamente perseguidos por la policía ³².

Los historiadores no se han detenido a estudiar los antecedentes y proporciones de la masacre de Uncía. Díaz Machicao, por ejemplo, se limita a reproducir la información dada por las autoridades. “El gobierno, en busca de la solución respectiva y en resguardo de los intereses de la empresa minera, envió tropas de Ejército, cuyos jefes trataron de persuadir a los amotinados para que depusieran sus actitudes hostiles. Los mineros -en la tragedia inicial que provocaba el capitalismo del estaño- desoyeron las amonestaciones y atacaron a las tropas”.

“La Razón” de 4 de junio de 1926, que estaba inspirada por el republicanismo de Salamanca y Escalier, registró un enérgico editorial de censura a la política antiobrera de Saavedra; la masacre fue también utilizada por la politiquería criolla:

“La masacre de Uncía constituye el monumento más oprobioso de la tiranía saavedrista, pues aún quedan las huellas del bárbaro asesinato de un puñado de obreros, que se presentaron en actitud pacífica con el fin de obtener soluciones favorables para la crisis que se había producido en esa oportunidad”.

Es bien sabido que la actitud de la feudal-burguesía sufrió posteriormente una radical modificación, cuando el movimiento sindical cobró una indiscutible independencia política. La gran prensa siempre encontró palabras y argumentos para justificar el periódico asesinato de obreros.

6 GUILLERMO GAMARRA

Guillermo Gamarra Barragán (carpintero) nació en la ciudad de La Paz el 7 de junio de 1891. Descendiente de uno de los reyes de la coca supo identificarse con los trabajadores.

31.- “Rememorando”, “Bandera Roja”, 8 de junio de 1926.

32.- Rosa Rodríguez, “En los funerales de la camarada Pareja”, “Bandera Roja”, 25 de octubre de 1926.

El año 1921, antes de constituirse en el distrito minero de Uncía, tuvo a su cargo la Presidencia del Centro Obrero de Estudios Sociales, organismo al que debe gran parte de su formación ideológica. Durante la masacre, 1923, fue Presidente de la Federación Obrera Central de Uncía. Posteriormente, a su retorno a La Paz fue elegido Secretario General de la Unión de Trabajadores en Madera (1926).

Gamarra fue, indiscutiblemente, la figura central de los acontecimientos de junio de 1923, que mostró una mayor formación marxista y una recia personalidad. Muchos sostienen, sin exhibir los documentos probatorios del caso, que la eminencia gris de la Federación de Uncía fue Ernesto Fernández, hecho que parece corroborarse por su misteriosa desaparición.

El militante del Centro Obrero de Estudios Sociales se trasladó a las minas junto con su compañera. El dirigente sindical de ese entonces, que todavía no había conocido los efectos deletéreos de la degeneración burocrática, elegía a una mujer que guardase relación con sus inquietudes y con su forma de vida, es decir, que fuese hija del pueblo. Después de la masacre y la innarrable represión que le siguió, la federación Obrera Minera de Llallagua tuvo que socorrerla económicamente para su traslado a La Paz: "La Federación Obrera Minera de Llallagua, en el entendido de que es un deber proteger a los familiares de los camaradas deportados, ha tenido a bien enviarle la suma de 150 bolivianos para su viaje a su ciudad natal". Miguel Viscarra, Presidente de dicha Federación en ese momento, pone de relieve los grandes servicios prestados por Gamarra a la clase obrera, "sacrificándose -dice- con perjuicio de sus intereses, por la causa santa de la libertad y del derecho" (de la nota fechada en Llallagua el 25 de julio de 1923).

Gamarra siempre se ha mostrado orgulloso de su actuación en Uncía, cree que es la más grande obra de su vida y no una simple locura de juventud. Con firmeza y honestidad nunca dejó de salir en defensa de la conducta obrera. Tres años después de la masacre, en 1926, cuando "La República" de La Paz sostuvo, en un artículo titulado "Los responsables de los sucesos de Uncía", que los dirigentes de la Federación premeditadamente precipitaron la masacre para servir a los partidos rosqueros que se oponían a Saavedra. Gamarra envió una carta que toca aspectos interesantes:

"La Federación Obrera Central de Uncía no estaba subordinada ni menos recibió influencia de personas ajenas a la clase trabajadora; el suscrito tampoco militaba ni hoy milita en las filas de los partidos políticos históricos (léase tradicionales); los demás miembros del directorio de la Federación también se hallaban alejados de las luchas políticas. ¿Por qué entonces los trabajadores federados podían ponerse al servicio de los políticos o los partidos de la burguesía? Esta es una pregunta que nunca será contestada por el articulista de ese periódico. Conste también que no hubo ningún movimiento huelguístico hasta el momento de la masacre. Lo que hacíamos los federados es prepararnos para llevar a cabo un paro general de carácter pacífico, con el principal objeto de lograr el retiro del déspota y arbitrario gerente de las minas de Llallagua, señor Emilio Díaz.

"Si a los genuinos dirigentes obreros de la Federación Obrera Central de Uncía del año 1923 su periódico nos califica de "agitadores", sea en buena hora. Agitadores habrá en Bolivia mientras el pueblo trabajador sufra miseria y hambre; agitadores habrá si no se pone coto a los abusos incalificables de los señores capitalistas"³³.

33.- Guillermo Gamarra, "Carta al director de 'La República'", La Paz, 7 de junio de 1926.